
Dr. Manuel I. Ochoa A.

Codificación de la Ley de Matrimonio Civil, sus reformas y jurisprudencia

ADVERTENCIA

Sin pretensión alguna, y sólo por el deseo de querer servir en algo a mis conciudadanos, en especial, a mis coprofesionales, en la recta aplicación de las leyes, presento esta Codificación de la Ley de Matrimonio Civil de 1913 con las Reformas dictadas el 4 de diciembre de 1935 y 23 de abril de 1937, ya que no está en vigencia la Ley de Matrimonio Civil de 24 de marzo de 1938, en vista del Decreto Supremo de 6 de mayo del mismo año, que la suspendió. Para ilustración de los artículos, en cuanto a su interpretación usual, transcribo los fallos dictados por la Excma. Corte Suprema, publicados en la Gaceta Judicial.

AUTORIZACION

Nº 137.—República del Ecuador.—Gobernación del Azuay.—Cuenca, a 8 de marzo de 1940.

Sr. Dr. Dn. Manuel Ignacio Ochoa Alvear.—Ciudad.

Para los fines consiguientes, llevo a conocimiento de Ud. el oficio Nº 323 J., de 4 del presente, dirigido a esta Gobernación por el Sr. Subsecretario del Ministerio de Gobierno y Justicia, que dice:

“Con referencia al atento oficio de Ud. Nº 112, de 24 de febrero último, cúpleme transcribirle el siguiente Decreto recaído en la solicitud elevada por el Sr. Dr. Manuel Ignacio Ochoa A., a fin de que se sirva hacerlo trascendental al interesado:—“Ministerio de Gobierno, Justicia, etc.—Quito,

marzo cuatro de mil novecientos cuarenta.—De acuerdo con el inciso tercero del artículo ochenta y ocho de la Ley Orgánica de Hacienda, autorízase al Sr. Dr. Manuel Ignacio Ochoa A., para que publique MIL EJEMPLARES de la Codificación de la Ley de Matrimonio Civil con sus Reformas y los fallos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.—COMUNIQUESE.—El Ministro, (f) C. Augusto Durango.—El Subsecretario, (f) José R. Chiriboga V.”—De Ud., muy atentamente, (f) José R. Chiriboga V,” Subsecretario de Gobierno.—Honor y Patria, (f) A. Carrasco T., Gobernador del Azuay”.

Ley de Matrimonio Civil

Art. 1º.—Se establece el Matrimonio Civil en la República.

Art. 2º.—Para que el matrimonio produzca efectos civiles, es necesario que se celebre con arreglo a las prescripciones de esta Ley.

Art. 3º.—No podrán contraer matrimonio:

1º—El cónyuge sobreviviente con el asesino o cómplice en el asesinato de su marido o mujer;

2º—El hombre o mujer, con su correo en el delito de adulterio;

3º—Los impúberes;

4º—Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto;

JURISPRUDENCIA.—Comprobado mediante instrumentos públicos y con declaraciones de testigos la existencia de un matrimonio anterior contraído en nación extranjera; matrimonio cuya nulidad o divorcio no se haya declarado y constar que se ha celebrado otro matrimonio en el Ecuador, éste se declara nulo por no estar disuelto el vínculo anterior. G. J. N° 104 de la II Serie Pág. 828.

Atenta la afirmación en que el esposo funda su demanda, respecto del hecho positivo y preciso de que su esposa cuando contrajo matrimonio con él estaba casada con otro, y la contestación simplemente negativa de la demanda, es indudable que la carga de la prueba hubo de quedar sujeta a lo dispuesto en los incisos 1º y 2º del Art. 142 del Código de de Enjuiciamiento Civil (114 de la edición vigente), y de ninguna manera a lo prescrito en el inciso 3º del propio artículo; como consecuencia de lo dicho, el actor debe probar el fundamento de su demanda, o sea, el hecho de que, cuando

su esposa contrajo matrimonio con él, vivía el esposo de aquella; que la partida de matrimonio de la demandada con su esposo anterior no prueba, por sí sola, que éste haya estado vivo al tiempo del matrimonio de aquella con el actor, para el efecto especial de la prueba del fundamento de la demanda, tal como lo planteó el demandante; y que carece de mérito probatorio la partida de defunción que no reúne el requisito previsto por el N° 4° del Art. 12 de la Ley de Registro Civil, respecto de la expresión de aquella de las circunstancias determinadas en ese número, que hubiese motivado la intervención de los testigos que han suscrito la partida. (Art. 54 de la citada Ley). G. J. N° 208 de la IV Serie Pág. 1667.

5°—Los impotentes;

6°—Los dementes;

7°—Los parientes por consanguinidad en línea recta;

8°—Los parientes colaterales hasta el segundo grado civil de consanguinidad; y

9°—Los parientes en primer grado civil de afinidad.

Art. 4°.—El matrimonio contraído por personas comprendidas en cualquiera de los casos puntualizados en el artículo precedente, es nulo.

Art. 5°.—Son; igualmente, causas de nulidad de matrimonio:

1ª.—La falta por parte de alguno de los contrayentes, de libre y espontáneo consentimiento al tiempo de la celebración del mismo;

2ª.—El error, en cuanto a la identidad del otro contrayente;

3ª.—El rapto de la mujer, siempre que ésta, al tiempo de celebrarse el matrimonio, no haya recobrado su libertad;

4ª.—El no haberse celebrado el matrimonio ante el funcionario civil correspondiente, el actuario y dos testigos; y

JURISPRUDENCIA.—Es nulo el matrimonio cuando se ha delegado a un funcionario para que intervenga en la celebración del matrimonio, e interviene otro. G. J. N° 73 de la II Serie. Pág. 578.

El matrimonio civil debe celebrarse ante el Jefe Político del Cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes; a no intervenir esta autoridad en la celebración del matrimonio, sino otro funcionario del Orden Administrativo sin la autorización escrita del Jefe Político competente, el matrimonio es nulo; y el funcionario que indebidamente ha autorizado el matrimonio, se halla incurso en el caso del Art. 382 del Código Penal (509 de la edición vigente). G. J. N° 44 de la III

Serie, Pág. 1588.

Al intervenir el Jefe Político en la celebración de un matrimonio, debe actuar como Secretario el de la Jefatura Política; y la falta de intervención de este Secretario, el de la Jefatura Política, causa la nulidad del matrimonio. G. J. N.º 85 de la III Serie Pág. 1915.

Si bien, conforme al Art. 9 de la Ley de Matrimonio Civil, la competencia de los Jefes y Tenientes Políticos para presenciar y legalizar matrimonios, se determina por razón del lugar del domicilio de los contrayentes, y no por la del territorio dentro del cual ellos ejercen las funciones correspondientes a sus respectivos cargos, es evidente, de otro lado, que los Jefes y Tenientes Políticos están facultados por el inciso 2º del propio artículo, para delegar, a cualquier funcionario, del Orden Administrativo, el ejercicio de la facultad de concurrir a la celebración de un matrimonio; no siendo indispensable que dicha delegación conste en el proceso mismo matrimonial, por no estar dicha constancia requerida como solemnidad alguna, menos como una de las que, a no observarse, cause la nulidad del matrimonio; y que el Secretario de la autoridad que delega la facultad de concurrir a un matrimonio, es el llamado a autorizar las correspondientes diligencias. G. J. N.º 153 de la IV Serie. Pág. 1227.

Es válido el matrimonio celebrado en la ciudad cabecera de Cantón, ante el Teniente Político de una de las parroquias urbanas, con autorización del Jefe Político e intervención de Secretario ad-hoc nombrado por dicho Teniente; resolución que se dicta desechando la acción de nulidad de matrimonio, fundada en que debía actuar como Secretario el de la Jefatura Política, G. J. N.º 13 de la V. Serie. Pág. 205.

5ª.—La impotencia anterior al matrimonio,

Art. 6º.—En los cinco casos presentes, el matrimonio puede volver a celebrarse válidamente, una vez removidas, o subsanadas, las causas que lo invalidaron. Mas, en los casos del Art. 3º serán perpetuamente insubsanables las de los Nos. 1, 2, 7, 8 y 9. Las demás causas del dicho Art. 3º al desaparecer, no impiden la celebración del nuevo matrimonio.

Art. 7º.—Los púberes menores de edad no pueden contraer matrimonio, sin la respectiva licencia de sus padres o guardadores, con arreglo al Código Civil; pero el matrimonio celebrado sin esta formalidad, no es nulo si el contrayente tiene más de diez y ocho años de edad.

JURISPRUDENCIA.—Para la validez del matrimonio de los menores de 18 años y mayores de 14, deben concurrir el permiso de los padres o guardadores y el consenti-

miento del contrayente. Ordénase el enjuiciamiento del Jefe Político que procedió a la celebración de dicho matrimonio, sin los requisitos legales. G. J. N° 106 de la II Serie. Pág. 846

No es fehaciente, como lo exige el Art. 11 N° 7 de la Ley de Matrimonio Civil, el mero documento privado en el que se expresa el consentimiento para el matrimonio del menor de 18 años; y en consecuencia, es nulo el matrimonio celebrado, si consta, de solo este documento, el permiso de quién debe consentir en el matrimonio del menor. G. J. N° 177 de la III Serie. Pág. 2652.

Art. 8°.—En los nueve casos del Art. 39 y en el caso 49 del Art. 59 la acción de nulidad puede proponerse por los cónyuges, por sus ascendientes y por el Ministerio Público.

En todos los demás casos, la acción se concede, personalmente a sólo el cónyuge perjudicado.

JURISPRUDENCIA.—La competencia de los Jefes y Tenientes Políticos para presenciar y legalizar el matrimonio, no se determina en razón del territorio dentro del cual ellos ejercen las funciones correspondientes a su respectivo cargo, sino, conforme al Art. 9 de la Ley de Matrimonio Civil, por el lugar y el domicilio de los contrayentes; por esto, así como los Jefes Políticos sólo pueden autorizar los matrimonios de los domiciliados en la ciudad, cabecera del Cantón, los Tenientes sólo pueden concurrir a los de los domiciliados en sus parroquias rurales; sin que obste a la validez del matrimonio el que la delegación de que habla el inciso 29 del propio artículo, no conste en el proceso mismo matrimonial, desde que tal circunstancia no está establecida como solemnidad alguna, menos como una en las que, a no observarse, causa en la nulidad del matrimonio; y que únicamente las personas determinadas en el Art. 8 de la sobredicha Ley, pueden demandar la nulidad de un matrimonio. G. J. N° 6 de la IV Serie. Pág. 45.

Intentada la acción de nulidad de un matrimonio por el padre de la mujer casada, menor de edad, en uso de la facultad concedida por el Art. 8° de la Ley de Matrimonio Civil, debe entenderse que el actor ejerce un derecho personal suyo, y no el de representante legal de la hija, cuya emancipación de la autoridad paterna, queda consumada por el hecho del matrimonio; por lo mismo la demanda debe citarse a la cónyuge, y, por ella, a un curador ad-litem, debiendo ser oído e intervenir como parte el defensor de menores (Agente Fiscal); y por consiguiente, al faltar la intervención del curador y del Defensor de Menores (Agente Fiscal), el proceso es nulo. G. J. N° 68 de la IV Serie. Pág. 544.

A la demanda de nulidad de matrimonio corresponde la sustanciación del juicio ordinario, ya que la Ley no ha establecido trámite especial para éllo; que en este juicio la citación de la demanda debe practicarse con observancia de las formalidades que la Ley prescribe; que, según el Art. 465 del Código de Enjuiciamiento Civil (1125 de la edición vigente), entre esas formalidades se cuenta la de la copia de la demanda que, con el decreto de traslado con apercibimiento en rebeldía, se entrega a la parte demandada, lo que debe anotarse en la diligencia misma de la citación; que, por lo mismo, a omitirse la entrega de la copia, se falta a la primera solemnidad sustancial prescrita por el Art. 423 del indicado Código (Nº 4º del Art. 372 de la edición vigente), nulidad que aún debe ser declarada de oficio, como comprendida en el Art. 407 (375 de la edición vigente); que si las partes citadas con la demanda no la contestan, el actor debe acusarles la rebeldía para que pueda continuar el juicio; y que la intervención del Fiscal y Defensor de Matrimonios (Agente Fiscal), que, en el presente caso, representan el interés público, no puede ser eficaz y eficiente con sólo la formalidad de la citación, pues que es menester que den su dictamen; y que, en consecuencia, el proceso es nulo, si se omiten las formalidades arriba indicadas. G. J. Nº 198 de la IV Serie. Pág. 1587.

NOTA.—Siempre que se presente una demanda, solicitud, pedimento, alegato o cualquier otra exposición, pertinentes a un juicio, la parte que la presente está obligada a acompañar, autorizadas con su firma y con la del Abogado que le patrocina, tantas copias en papel común, como partes intervengan en el juicio, para ser entregadas a cada una de dichas partes, previa certificación, que pondrá el Secretario, respecto de la exactitud de tales copias.

Lo propio se observará cuando se presenten nóminas de testigos.

El actuario no recibirá escrito alguno que no se presente acompañado de las copias de que habla este artículo, y, si de hecho lo recibe, no se le dará curso, hasta que se presenten las copias; pero en todo caso se pondrá la fe de presentación.

Si en una causa o procedimiento judicial hubieren más de cinco partes, exclusive la que presenta el escrito, se acompañarán cuatro copias para que sean

Si una persona que se dice representante legal de otra, demanda la nulidad del matrimonio contraída por ésta, y, también, la falsedad del mismo, necesita, para proponerlas, por tratarse de dos acciones, capacidad legal para cada una de ellas. Que la acción de nulidad del matrimonio, por no constar en el acta de la celebración la firma del contrayente, caso previsto en el N° 5° del Art. 18 de la Ley de Matrimonio Civil, no puede intentarla, sino el cónyuge perjudicado, siendo acción personal de éste (Art. 8° de la referida Ley). G. J. N° 11 de la V Serie. Pág. 171.

Que, si es verdad que el Art. 8° de la Ley de Matrimonio Civil, en tratándose de la nulidad del matrimonio de un púber menor de 18 años, por falta de consentimiento de las personas que deben prestarlo, la acción se concede, personalmente, sólo al cónyuge perjudicado, en el caso a la menor, a quien la ley ampara prescribiendo la concurrencia de las personas que debían completar su deficiente consentimiento; también lo es, que la acción no solo consiste en la presentación de la demanda, sino también en el ejercicio del derecho contenido en el pedimento expreso de que se pronuncie la nulidad, a fin de alcanzar el fallo judicial que declare la inexistencia del matrimonio por el vicio de que adoleció el acto de celebración, petición que entraña no sólo un allanamiento a la demanda propuesta por el otro cónyuge, sino una asociación a ella y que, si ha reiterado e intervenido, pidiendo pruebas y otras diligencias, deja fuera de duda su interés porque se acoja la acción. G. J. N° 69 de la V Serie. Pág. 1633.

entregadas a cada una de las que hubieren sido designadas por sorteo que, por una sola vez, se practicará al iniciarse el procedimiento, dejando constancia en actas suscrita por el Juez y el Secretario, si lo hubiere.

Si cada parte se compusiere de dos o más personas, se acompañará una sola copia para éstas, que se entregará a cualquiera de ellas o al Procurador Común. Igual cosa se observará cuando varios interesados estuviesen en el caso de constituir un solo Procurador, haya o no orden judicial al respecto, pero que se la expedirá necesariamente en los casos y con los efectos previstos por la Ley.

No se acompañará copia cuando la parte o partes hubieren sido declaradas rebeldes, y en general en los casos en que no deban ser notificadas.—Art. 1125, C. P. Civil.

Según el Art. 8º de la Ley de Matrimonio Civil, la acción de nulidad es personal y no puede proponerse sino por las personas en aquel determinadas, sin que sea potestativo declarar de oficio la nulidad de una acta de matrimonio, encontrándose arreglada a la Ley la partida de inscripción de dicho matrimonio. G. J. Nº 124 de la V Serie. Pág. 2973.

Art. 9º.—El matrimonio Civil debe celebrarse ante el Jefe Político, su Secretario y dos testigos hábiles, en las ciudades cabeceras de Cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes, o ante el Teniente Político y un Secretario ad-hoc, en las parroquias rurales. El matrimonio celebrado de otra manera, es nulo.

Pero con autorización escrita del respectivo Jefe o Teniente Político, cualquier otro funcionario del Orden Administrativo, puede celebrar válidamente un matrimonio, llenando las demás formalidades expresadas en esta Ley.

JURISPRUDENCIA.—Es nulo el matrimonio cuando se ha delegado a un funcionario para que intervenga en la celebración del matrimonio e interviene otro G. J. Nº 73 de la II Serie. Pág. 578.

El matrimonio civil debe celebrarse ante el Jefe Político del Cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes; a no intervenir esta autoridad en la celebración del matrimonio, sino otro funcionario del Orden Administrativo sin la autorización escrita del Jefe Político competente, el matrimonio es nulo; y el funcionario que indebidamente ha autorizado el matrimonio, se halla incurso en el caso del Art. 382 del Código Penal (509 de la edición vigente). G. J. Nº 44 de la III Serie. Pág. 1588.

Al intervenir el Jefe Político en la celebración de un matrimonio debe actuar como Secretario el de la Jefatura Política; y la falta de intervención de este Secretario, el de la Jefatura Política, causa la nulidad del matrimonio. G. J. Nº 85 de la III Serie, Pág. 1915.

El matrimonio civil es nulo cuando se lo celebra ante un Teniente Político que no es del domicilio de ninguno de los contrayentes. G. J. Nº 136 de la III Serie Pág. 2324.

La competencia de los Jefes y Tenientes Políticos para presenciar y legalizar matrimonios, no se determina en razón del territorio dentro del cual ellos ejercen las funciones correspondientes a su respectivo cargo, sino, conforme el Art. 9º. de la Ley de Matrimonio Civil, por el lugar del domicilio de los contrayentes; por esto, así como los Jefes Políticos sólo pueden autorizar los matrimonios de los domiciliados en la ciudad cabecera del Cantón, los Tenientes Políticos sólo pue-

den concurrir a los de los domiciliados en sus parroquias rurales; sin que obste a la validez del matrimonio el que la delegación de que habla el inciso 2º del propio artículo, no conste en el proceso mismo matrimonial, desde que tal circunstancia no está establecida como solemnidad alguna, menos como una de las que, a no observarse, causen la nulidad del matrimonio; y que, únicamente las personas determinadas en el Art. 8º de la sobredicha Ley, pueden demandar la nulidad de un matrimonio G. J. N° 6 de la IV Serie, Pág. 45.

Si bien conforme al Art. 9º de la Ley de Matrimonio Civil, la competencia de los Jefes y Tenientes Políticos para presenciar y legalizar matrimonio se determina por razón del lugar del domicilio de los contrayentes, y no por la del territorio dentro del cual ellos ejercen las funciones correspondientes a sus respectivos cargos, es evidente, de otro lado que los Jefes y Tenientes Políticos están facultados, por el inciso 2º del propio artículo, para delegar a cualquier funcionario del Orden Administrativo el ejercicio de la facultad de concurrir a la celebración de un matrimonio; no siendo indispensable que dicha delegación conste en el proceso mismo matrimonial, por no estar dicha constancia requerida como solemnidad alguna, menos como una de las que, a no observarse, causen la nulidad del matrimonio; y que el Secretario de la autoridad que delega la facultad de concurrir a un matrimonio, es el llamado a autorizar las correspondientes diligencias. G. J. N°. 153 de la IV Serie Pág. 1227.

Es válido el matrimonio celebrado en la ciudad cabecera del Cantón, ante el Teniente Político de una de las parroquias urbanas, con autorización del Jefe Político, con intervención del Secretario ad-hoc nombrado por el dicho Teniente. Resolución que se dicta desechando la acción de nulidad del matrimonio, fundada en que debía actuar como Secretario el de la Jefatura Política. G. J. N° 13 de la V Serie Pág. 205.

Nombrado Curador ad-litem para que represente en juicio a una menor adulta, sin expresar la clase de pleito que se va a entablar; y demandada posteriormente por el marido de dicha mujer, la nulidad del matrimonio contraído con ella, no hay en realidad tal nombramiento de Curador, porque no se ha procedido conforme al Art. 483 del Código Civil y al Art. 10 de las Reformas al Código de Enjuiciamiento Civil de 20 de octubre de 1923 (798 de la edición vigente); y, sobre todo, porque a la fecha del nombramiento, no se conocía el pleito en que había de intervenir el Curador, lo cual

va contra la naturaleza legal del cargo de Curador ad-litem. Por tanto, habiéndose omitido en el trámite del juicio, la segunda de las solemnidades sustanciales, determinadas en el Art. 407 del Código de Enjuiciamiento Civil (3º del Art. 372 de la edición vigente), debe declararse la nulidad del proceso desde la citación con la demanda al Curador ad-litem, a costa de los responsables de las omisiones indicadas. G. J. N° 128, de la V Serie Pág. 3064.

Art. 10.—Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, sea personalmente, o por medio de apoderado, con poder especial, otorgado ante el Notario Público en todo caso.

Art. 11.—Antes de celebrarse el matrimonio, los contrayentes, por sí o por medio de sus Procuradores, expresarán ante el Jefe o Teniente Político, su Secretario y testigos, de palabra o por escrito:

1º.—La voluntad de contraer matrimonio;

2º.—El nombre, apellido, edad, nacionalidad, estado, profesión u oficio y domicilio de los contrayentes;

3º.—El nombre, apellido y nacionalidad, estado, profesión u oficio y domicilio de los padres de los contrayentes;

4º.—El nombre, apellido y nacionalidad del cónyuge difunto, si alguno de los contrayentes fuere viudo;

5º.—El nombre y edad de los descendientes legítimos de los contrayentes, caso de tenerlos de algún matrimonio anterior disuelto;

6º.—La circunstancia de hallarse formado los inventarios de los bienes de los menores que estuvieren bajo la guarda, o la patria potestad, de alguno de los contrayentes o la prueba de que éstos no tienen descendientes ni pupilos bajo su cuidado, todo según el Código Civil;

7º.—El nombre de las personas cuyo consentimiento sea necesario caso de que alguno de los contrayentes fuere menor de edad, o la constancia fehaciente del permiso, por escrito, si el que debe darlo no se hallare presente; y,

JURISPRUDENCIA.—No es fehaciente, como exige el Art. 11 N° 7º de la Ley de Matrimonio Civil, el mero documento privado en que se expresa el consentimiento para el matrimonio del menor de 18 años; y, en consecuencia, es nulo el matrimonio celebrado, si consta de sólo ese documento, el permiso de quién debe consentir en el matrimonio del menor. G. J. N° 177, de la III Serie. Pág. 2652.

Conforme al Art. 7º de la Ley de Matrimonio Civil, es necesario que el contrayente, menor de 18 años, obtenga la respectiva licencia de sus padres o guardadores, con arreglo

al Código Civil, so pena de visiar de nulidad el acto; y en el caso, la menor de edad queda comprobada si este hecho, sobre estar reconocido por todas las partes que intervienen en el juicio, está corroborado por las diligencias practicadas para proveer de un Curador especial que presente a la menor en este litigio y aún con la partida bautismal, que si bien no está admitida como prueba legal de la edad, si puede estimarse como una presunción al respecto. G. J. N° 24 de la V Serie. P. 478.

8°.—La manifestación de que no tienen prohibición ninguna legal para contraer matrimonio.

Los contrayentes presentarán una información de dos testigos, por lo menos, sobre lo prescrito en el N° 8° de este Art., información que será recibida en legal forma.

Art. 12.—El Jefe o Teniente Político respectivo, hará fijar en las puertas del despacho, por ocho días consecutivos, anuncios en el que se hagan saber el matrimonio que se vá a celebrar.

Queda facultado el Jefe Político para dispensar este requisito, por las causas que juzgare convenientes, a solicitud de parte.

Art. 13.—La omisión de las diligencias prevenidas en el Art. 11 no anula el matrimonio, salvo lo dispuesto en el Art. 7°; pero la Autoridad que hubiere procedido a celebrarlo sin exigir el cumplimiento de ellas, será castigado con una multa de cincuenta a doscientos sucres, la cual se impondrá por el Gobernador de la respectiva Provincia, sin perjuicio de la acción criminal a que hubiere lugar.

Art. 14.—Llenadas estas formalidades, y siempre que no haya oposición alguna se procederá a la celebración del matrimonio, inmediatamente, o hasta dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se haya practicado lo dispuesto en el Art. 11.

Art. 15.—Si transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, no se hubiere verificado el matrimonio, por cualquier motivo, para llevarlo a cabo, se repetirán las solemnidades prescritas en dicho Art. 11.

Art. 16.—Podrán ser testigos de las diligencias previas al matrimonio, y de el acto mismo, todos los que sean mayores de diez y ocho años, varones o hembras, menos los siguientes:

- 1°.—Los dementes;
- 2°.—Los ciegos, los sordos y los mudos;
- 3°.—Los notoriamente vagos y los mendigos;
- 4°.—Los rufianes y las meretrices;

5º.—Los condenados por crimen o delito que haya merecido más de cuatro años de prisión; y

6º.—Los que no entienden el idioma castellano o el quichua, en su caso.

Art. 17.—Para que un Jefe o Teniente Político pueda proceder al matrimonio de una persona que se halla en peligro de muerte, no se necesita más diligencia previa que el certificado Médico que acredite dicho peligro.

En donde no hubiere Médico, o en caso difícil de encontrarlo, se suplirá el certificado con la razón sentada por el Jefe o Teniente Político y el Secretario respectivo, y firmada por dos testigos.

Art. 18.—El matrimonio se celebrará en esta forma:

Una vez presentados los contrayentes, por sí o por medio de sus apoderados, ante el Jefe o Teniente Político, el Secretario respectivo y los dos testigos, el Jefe o Teniente Político leerá, o hará leer, con el actuario los documentos que contienen las diligencias preceptuadas en el Art. 11. Después de esto, el Jefe o el Teniente Político preguntará a los contrayentes si se reciben voluntariamente el uno al otro por marido y por mujer; y, si ellos contestaren afirmativamente, les dirá: “Ya que así lo queréis, yo, en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, os declaro legalmente casados”.

Inmediatamente, a continuación de la última diligencia de las prevenidas en dicho Art. 11, el actuario extenderá el acta de todo lo obrado, expresando, con prolijidad, todo lo concerniente al acto de la celebración del matrimonio, el lugar, día y hora en que se verificó; el nombre, apellido, domicilio, estado, profesión, oficio u ocupación de los contrayentes, y el de los testigos, en la misma forma.

El acta será firmada por los contrayentes, o sus apoderados, por los testigos, por el Jefe o Teniente Político y por el Secretario respectivo. Si los contrayentes, sus apoderados o los testigos, no supieren o no pudieren firmar, se expresará esta circunstancia; y por ellos firmarán otro u otros a ruego, pudiendo una sola persona firmar por varias.

Son requisitos esenciales para el efecto de la validez del matrimonio:

1º.—La presencia de los contrayentes o de sus apoderados;

2º.—La del Jefe o Teniente Político, del actuario y los testigos;

3º.—La constancia de que los contrayentes se recibieron como esposos mutuamente;

4º.—La de que el Jefe o Teniente Político los declaró casados;

5º.—La constancia, en acta, de esos particulares, bajo la firma del Jefe o Teniente Político, del actuario, de los contrayentes y de los testigos, por sí o por otros, a ruego, en su caso, respecto de los contrayentes y testigos.

NOTA.—Créanse Casa Cunas, Colonias de recuperación física, hogares infantiles, Asilos de Mendigos, etc., en toda la República, y para su sostenimiento, establécense los impuestos determinados en los Arts. siguientes: La suma de ciento a doscientos sucres, que se cobrará por todo matrimonio que se efectuare fuera de la Oficina de Registro Civil, exceptuando el matrimonio inextremis, cuando los contrayentes carecieren de recursos. Este impuesto se computará en razón de la mayor edad de uno de los contrayentes, de acuerdo con la siguiente escala:

Hasta de 24 años de edad	\$ 100,00
De 25 a 34 años	„ 150,00
De 35 años en adelante	„ 200,00

En las cabeceras de Provincia el Jefe Político exigirá, antes de la celebración del matrimonio, el recibo de pago del impuesto, conferido por el Jefe de Recaudaciones. En las cabeceras cantonales y parroquiales el valor del impuesto se depositará en la respectiva Oficina de correos, obteniendo libranza a la orden del Jefe Provincial de Recaudaciones. Esta libranza será entregada, antes de la celebración del matrimonio, al Jefe o Teniente Político, según el caso, quienes la remitirán, inmediatamente al Jefe Provincial de Recaudaciones, indicando el nombre y edad de los contrayentes, fecha de celebración del matrimonio y valor del impuesto (Arts. 1 y 2 del Decreto Supremo de 27 de enero de 1938.—Registro Oficial Nos. 78 y 79 de 28 y 29 de enero de 1938).

Para la celebración de cada matrimonio, el Jefe o el Teniente Político formará un expedientillo que debe comenzar con el acta inicial mencionada en el Art. 11 de la Ley, y concluir con la del matrimonio mismo, y la razón que pondrá el Secretario de que se ha expedido o no, el certificado prevenido en el Art. 27 (Artículo éste derogado.—4 de diciembre de 1935). Art. 1º

JURISPRUDENCIA.—Si una persona que se dice representante legal de otra, demanda la nulidad de matrimonio contraído por ésta, y, también, la falsedad del mismo necesita, para proponerlas, por tratarse de dos acciones, capacidad legal para cada una de ellas; y la acción de nulidad del matrimonio, por no constar en el acta de la celebración la firma del contrayente, caso previsto en el N.º 5 del Art. 18 de la Ley de Matrimonio Civil, no puede intentarle sino el cónyuge perjudicado, siendo acción personal de éste (Art. 89 de la referida Ley) G. J. N.º. 11 de la V Serie. Pág. 171.

Art. 19.—La copia del expediente que tenga las diligencias preceptuadas en el Art. 11, y la de la acta de la celebración del matrimonio, serán remitidas al respectivo Jefe del Registro Civil, dentro del término de 8 días, bajo la multa de diez a cien sucres, la cual será impuesta por el Gobernador de la Provincia.

Art. 20.—Los Agentes Diplomáticos y Consulares del Ecuador en Nación extranjera reemplazarán a los Jefes Políticos, para la celebración del matrimonio, entre ecuatorianos, ecuatorianos y extranjeros, o entre extranjeros domiciliados en la República.

Art. 21.—El matrimonio termina:

1.º—Por la muerte natural de uno de los cónyuges;

JURISPRUDENCIA.—El matrimonio termina en cualquiera de los cuatro casos previstos en el Art. 21 de la Ley de Matrimonio Civil; terminado el matrimonio en alguno de esos casos, mal puede terminar de nuevo, por sobrevenir otro de los motivos de terminación, ya que sería necesario para esto que el matrimonio aún subsista, supuesto inaceptable por contradictorio al efecto ya producido; ya que terminado el matrimonio por muerte de uno de los cónyuges, deben producirse los efectos resultantes de ese modo de terminación previsto en el N.º 1.º del citado artículo, sin que, por lo mismo, sea dable tomarse en cuenta los otros efectos posibles que resultarían de otro de los modos de terminación no realizado y por lo mismo, concluido el juicio de nulidad de matrimonio por el hecho de la muerte de uno de los cónyuges, no hay ya juicio entre cónyuges que puede ser continuado por persona alguna. G. J. N.º. 56 de la V Serie Pag. 2256.

del Reglamento de 10 de noviembre de 1902.

El formulario para la celebración del matrimonio, véase al fin de esta Ley.

29.—Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio.

39.—Por sentencia ejecutoriada que declare la muerte, por presunción, en el caso de desaparecimiento por más de diez años; y,

49.—Por divorcio.

Art. 22.—El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio; pero la mujer podrá contraerlo sólo después de trescientos días de inscrita el acta de divorcio o la sentencia que lo declare.

La mujer que, al tiempo de la sobredicha inscripción, estuviere embarazada y diere a luz, antes de los trescientos días, queda en aptitud legal para contraer nuevas nupcias, sin esperar el transcurso de dicho plazo.

La prohibición del inciso 1º de este artículo no se extiende al caso de que el nuevo matrimonio sea con el último marido o de que se trate de divorcio por consentimiento tácito.

Art. 23.—Los cónyuges pueden divorciarse libremente, por mutuo consentimiento. Este consentimiento puede ser expreso o tácito.

JURISPRUDENCIA.—Las disposiciones legales que establecen el divorcio, se aplican aun a los matrimonios celebrados antes de la vigencia de dichas leyes G. J. Nos. 69 y 102 de la II Serie Págs. 547 y 811.

El matrimonio definido en el Art. 99 del Código Civil, se halla sujeto a las leyes Civiles, pudiendo, por tanto, el Legislador modificarlas conforme a sus facultades; dada la Ley de Matrimonio Civil, expedidas las Reformas, el Juez tiene que aplicarlas, como toda otra Ley de la República, cualquiera que sea la fecha de la celebración de un matrimonio G. J. Nº 5 de la III Serie Pág. 1261.

Al constar legalmente haberse contraído matrimonio en país extranjero, en conformidad a las Leyes del mismo país, el matrimonio surte efectos civiles en el Ecuador, si consta por otra parte, la capacidad de los contrayentes; y si los cónyuges de un matrimonio así celebrado, constituyen domicilio en el Ecuador, sus Jueces son competentes para conocer de las causas de divorcio que entre aquellos se susciten. G. J. Nº 209 de la III Serie Pág. 2906.

Que el numeral IV del Art. 21 de la Ley de Matrimonio Civil, declara que el matrimonio termina por el divorcio que disuelve el vínculo matrimonial; que esta disposición según su tenor literal y la historia fidedigna de su establecimiento, comprende todo matrimonio celebrado, ya bajo el im-

perio de la Ley anterior, ya con sujeción a la Ley actual; que lo establecido por el Art. 22 (23 del actual) respecto de las causas de divorcio, entre las que se cuentan el mutuo consentimiento de los cónyuges, no implica el desconocimiento retroactivo del estado civil adquirido conforme a la Ley vigente en la fecha de su constitución, sino que establece un derecho no reconocido por la Ley anterior; que dicho derecho, por ser inherente a la naturaleza del estado civil del matrimonio, corresponde ejercerlo tan sólo a los cónyuges, cuya voluntad debe manifestarse con sujeción a las formalidades de la Ley posterior; la cual debe ser aplicada ineludiblemente por el Juez con arreglo a lo prescrito en la regla segunda del Art. 7º. del Código Civil; y que la declaración en cuanto al vínculo matrimonial tiene por materia exclusiva los derechos que la Ley Civil declara como inherentes al matrimonio. G. J. N° 161 de la IV Serie Pág. 1289.

Que a estar escrito en idioma extraño el instrumento que sirve de base al divorcio consensual conforme al Art. 83 del Código de Enjuiciamiento Civil (282 de la edición vigente), debe ser traducido por dos intérpretes nombrados y juramentados por el Juez, a menos que las partes acuerden que fuese uno solo; que, por lo mismo no tiene autenticidad alguna la traducción hecha por el encargado de un Consulado del Ecuador en el Extranjero, ya que tal funcionario no tiene atribuciones para ello; que es requisito indispensable para que el matrimonio extranjero surta efectos civiles, que en el Ecuador, se halle inscrito en el Registro de que trata el inciso 1º del Art. 30 de la Ley de Registro Civil; y que, en consecuencia, no constando legalmente comprobada la existencia del matrimonio cuya disolución se trata obtener, el Juez se halla en el caso de denegar la demanda de divorcio G. J. N°. 27 de la V Serie Pág. 581. (1)

NOTA.—REGISTRO DE MATRIMONIOS.—Estos Registros comprenderán todos los matrimonios verificados en el Ecuador, o que se refieran a un ecuatoriano en el extranjero (inciso 1º del Art. 30 de la Ley de Registro Civil). En caso de matrimonio en el extranjero o a bordo, se observará lo prescrito en el Art. 26. En caso de nacimiento en el extranjero o a bordo de un buque ecuatoriano, en alta mar, la inscripción o registro se hará por el Cónsul respectivo, en el primer caso, y por el Capitán o Piloto en el segundo; todos los cuales tendrán las obligaciones y facultades de un Je-

La inscripción de un estado civil, en el Registro correspondiente, dá la posesión legal del mismo y faculta para ejercer los derechos concernientes a él; y, en tratándose de un matrimonio celebrado en Nación extranjera, la inscripción debe hacerse en la Oficina Central de la Capital de la República; que, sin estos requisitos, ni se adquiere la posesión legal del estado civil de casados ni la facultad para ejercer los derechos concernientes a tal estado, entre los cuales se cuenta el de obtener el divorcio en los casos puntualizados por la Ley de la materia; y que por lo tanto, al faltar esa inscripción no es admisible el divorcio solicitado G. J. N° 57 de la V Serie Pág. 1280.

Art. 24.—El consentimiento expreso se manifestará de consuno por ambos cónyuges o sus mandatarios con poder especial, de viva voz, ante el Jefe Político del domicilio del marido, y, en caso de que éste lo tuviere fuera de la República, del de la mujer, se extenderá acta de esta manifestación, la que será firmada por el Jefe Político, los cónyuges o sus mandatarios y dos testigos, y autorizada por el Secretario de dicha autoridad, y, en caso de falta o impedimento de éste por un Secretario ad-hoc. Los poderes quedarán agregados al acta y copia auténtica de ésta se inscribirá y archivará en la oficina de Registro Civil, sin lo cual no se entenderá perfeccionado el divorcio.

Si los cónyuges fueren menores de diez y ocho años, necesitarán para el divorcio la autorización de su Curador General, o, a falta de éste, la de un Curador Especial.

JURISPRUDENCIA.—Para el divorcio debe concurrir la voluntad de los dos cónyuges, pero la voluntad legalmente expresada; y si uno de los cónyuges es menor de edad, no puede prestar su consentimiento sino con intervención de un Curador Especial a quien se le hubiera discernido legalmente el cargo G. J. N° 148 de la II Serie Pág. 1181.

fe de oficina parroquial de Registro Civil; pero las copias y demás documentos correspondientes a una inscripción provisional hecha por estas personas, serán remitidas mediante el órgano regular, por el primer correo, cuando se trate de un Cónsul, o a la llegada de un buque en puerto ecuatoriano o a uno extranjero donde haya Cónsul ecuatoriano, en el otro caso; para que la inscripción definitiva se verifique entonces en la Oficina Central que actúe en la Capital de la República (Arts. 32 y 26 de la Ley de Registro Civil).

Para que se declare el divorcio, debe concurrir la voluntad de los dos cónyuges; pero, se entiende, la voluntad legalmente manifestada, como que sólo ésta es fuente de derecho y obligaciones; que, por lo tanto, el cónyuge menor de edad, para divorciarse por mutuo consentimiento, debe manifestarlo con intervención de un Curador especial; que la intervención de un Curador *ad-litem* y su ratificación en orden al consentimiento declarado en la demanda, no son suficientes a validarlo; porque las facultades de este Curador, que no son otras que las relativas a la representación del pupilo en las diligencias del juicio, no se extienden a la legal constitución del hecho en que la demanda se funda; y que en consecuencia, es improcedente la demanda de divorcio, si el pupilo ha manifestado su consentimiento con sólo la intervención de un Curador *ad-litem* G. J. N° 81 de la III Serie Pág. 1882.

El cónyuge menor de edad no puede estar en juicio de divorcio, sino representado por un Curador general o especial nombrado para el efecto, resultando nulo el proceso cuando se ha prescindido de tal curador G. J. N° 50, de la IV Serie Pág. 399.

Art. 25.—Constituye consentimiento tácito de los cónyuges, el hecho de su separación, por ruptura de las relaciones conyugales, por tres años contiguos, por lo menos, inclusive los casos en que dicho tiempo fuese, en todo o en parte, inmediato anterior a la fecha en que esta Ley comience a regir.

El divorcio por consentimiento tácito deberá ser declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, en virtud de demanda de cualquiera de los cónyuges.

Si propuesta demanda de divorcio por consentimiento tácito, no pudiere citarse al demandado, por estar ausente de la República y no saberse el lugar de su residencia, el Juez, previa comprobación de estos particulares, dispondrá que se cite al demandado, por medio de edictos que se publicarán en el Registro Oficial y en un periódico del Cantón, si lo hubiere.

Si transcurrieren seis meses de la publicación del edicto, sin que el demandado comparezca, el Juez, dispondrá que continúe la causa, interviniendo como parte uno de los Agentes Fiscales.

NOTA.—Corresponde a los Agentes Fiscales.—Desempeñar las funciones propias de Defensores de oficio conforme a lo dispuesto en las correspondientes leyes. Atribución 3ª del Art. 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

JURISPRUDENCIA.—El matrimonio definido en el Art. 99 del Código Civil, se halla sujeto a las Leyes Civiles, pudiendo, por tanto, el Legislador modificarlas conforme a sus facultades; y que dada la Ley de Matrimonio Civil y expedidas las Reformas, el Juez tiene que aplicarlas, como toda otra Ley de la República, cualquiera que sea la fecha de la celebración de un matrimonio G. J. N.º 5 de la III Serie. Pág. 1261.

En el juicio de divorcio consensual no cabe que el Juez declare, de oficio, la nulidad de un matrimonio G. J. N.º 263 de la IV Serie. Pág. 1327.

Atenta la contraposición de intereses que, por la naturaleza legal de las cosas, existe entre el marido y la mujer en el juicio de divorcio, aunque de hecho se hallen de acuerdo, no puede representarles conjuntamente una misma persona; que, por lo mismo, el proceso es nulo desde la intervención de aquel Procurador común; y que en cuanto al caso en que una misma persona haya firmado a ruego de ambos cónyuges no tiene paridad con el presente, puesto que tal firma no constituye acto de procuración judicial. G. J. N.º 30 de la V Serie. Pág. 736.

En el divorcio consensual, sólo puede prosperar el juicio en mérito de la persistente voluntad de los divorciantes, y que, a faltar la de uno o la de ambos, falta la base misma del juicio y carece ya de objeto el ejercicio de la jurisdicción voluntaria; y en consecuencia, el fallo derogatorio del divorcio, por la retracción del consentimiento de uno de los cónyuges no es suceptible de la consulta con que la Ley ha querido asegurar el acierto de la sentencia, que acepte la demanda, según se desprende el texto del Art. 29 de la Ley de Matrimonio Civil (Art. 35 de esta Codificación). G. J. N.º 108 de la V Serie. Pág. 2574.

El fallo que niega el divorcio consensual en segunda instancia, por haber desistido de él uno de los consortes o ambos, causa ejecutoria y no es susceptible de tercera instancia, porque, en tratándose de un asunto de jurisdicción voluntaria en el cual los interesados acuden a la autoridad judicial para solemnizar un acto de libre determinación de sus voluntades, el Tribunal Supremo, llamado a solemnizar definitivamente tal acto, no tiene ya razón ni motivo para intervenir en un procedimiento que carece de objeto y fundamento, puesto que, no interesando el desistimiento del divorcio al orden social, sólo los cónyuges pueden recurrir del fallo en que se niega tal divorcio, si se creyeran agraviados; entendiéndose, además, que el Art. 29 de la Ley de Ma-

rimonio Civil (35 de esta Coodificación), no establece la consulta y revisión de la resolución expedida en las causas matrimoniales, sino cuando se trate de validez, nulidad o divorcio, más no cuando se declare sin lugar éste, por retractación del consentimiento de ambos cónyuges o de uno de ellos G. J. N° 118 de la V Serie Pág. 2859.

Habiendo demandado el marido el divorcio por consentimiento tácito, por el hecho de hallarse separado muy largo tiempo de su mujer, con ruptura absoluta de las relaciones conyugales debida al abandono inmotivado del hogar doméstico por parte de la demandada y a que ésta no ha respondido a las finalidades del matrimonio a causa de su estabilidad; y no habiéndose justificado legalmente durante el término probatorio los fundamentos de la demanda, puesto que los testigos preguntados por el actor, si bien en sus declaraciones principales, afirman los hechos preguntados por el demandante, al contestar a las preguntas formuladas por la demandada, contradicen por completo sus primeros testimonios, es el caso de declarar sin lugar el divorcio por consentimiento tácito, solicitado por el marido contra su mujer, por no haberse comprobado la separación continua de los cónyuges por el tiempo señalado por el Art. 4º de los mandados agregar por el Art. 2º de la Reformatoria del Matrimonio Civil, de 4 de diciembre de 1935, ni el otro de los fundamentos de la demanda (Art. 25 de esta Coodificación). G. J. N° 130 de la V Serie Pág. 3100.

Que, aun cuando algunos testigos aseveran ser verdad el hecho de la separación de los dos cónyuges por más de tres años, sino afirman la continuidad de esa separación, como lo requiere el Art. 5º de la Reformatoria a la Ley de Matrimonio Civil, expedida el 4 de diciembre de 1935; y si, además al ser preguntados exponen que no saben el motivo del abandono, que ignoran el lugar, día y hora en que se efectuó o se inició dicho abandono y que sólo saben de esa separación por ser pública, carecen de verdad legal dichos testimonios, de acuerdo con lo prescrito en el N° 1º del Art. 256 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición anterior). El testimonio de un solo testigo, aunque dando razón de sus dichos, afirme el hecho de la separación de los dos cónyuges por un tiempo mayor de tres años, sino establece el otro requisito copulativo de la ruptura completa de las relaciones conyugales exigido por el mencionado Art. 5º para que se constituya el consentimiento tácito como fundamento de una demanda de divorcio, no es suficiente, para que el susodicho testigo singular pueda ser aceptado; y, tanto más si la au-

sencia de este último requisito se nota también en las declaraciones de los testigos del demandante, que no deponen sobre el hecho de que hayan sido continuos los tres años de la separación; la demanda de alimentos iniciada por la mujer contra el marido y terminada por transacción, si bien suministraba una grave presunción de que estaban separados los compromisarios, sin embargo, no es precisa dicha presunción por cuanto bien pudieron volver a unirse después de ese acuerdo, posibilidad tanto más verosímil cuanto que en la misma demanda se menciona las separaciones ocasionales, o precarias que han tenido los cónyuges, precedentemente; y que, no habiéndose comprobado plenamente los fundamentos de la acción; esto es que la separación de los cónyuges haya sido continua y por el tiempo de tres años, con ruptura completa de las relaciones conyugales durante este mismo lapso, no puede declararse el divorcio por consentimiento tácito, por falta de estos dos requisitos, exigidos ambos, conjuntamente. G. J. N° 134 de la V Serie Pág. 3214.

Art. 26.—Son también causas de divorcio:

1ª.—El adulterio de uno de los cónyuges;

JURISPRUDENCIA.—Dictadas las Reformas a la Ley de Matrimonio Civil, debe aplicarse aun a los matrimonios celebrados antes de la vigencia de dicha Ley Reformatoria. G. J. N° 69 de la II Serie Pág. 547.

El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges (Art. 119, inciso 1º del Código Civil); disuelto por esa causa, no es posible que vuelva a ser disuelto por ninguna otra cualquiera que esta sea; siendo la acción de divorcio personal (Art. 24 de la Ley de Matrimonio Civil, 40 de la actual), el derecho de ejercerla o de continuarla, es intrasmisible a los herederos, cesa la acción y termina la jurisdicción del Juez; por lo mismo, se extingue el poder conferido por el cónyuge que ha muerto para el juicio de divorcio, sin que, por las razones expuestas, pueda aplicarse la disposición del inciso 2º del Art. 2156 del Código Civil; y sin que los efectos civiles del divorcio por adulterio pueden ser materia de este juicio, para que se ordene su continuación, sólo para efectos de tomarlos en cuenta. G. J. N° 269 de la IV Serie Pág. 1401.

2ª.—Sevicia;

JURISPRUDENCIA.—La sevicia atroz consiste en el tratamiento *habitualmente* cruel que pone en peligro la salud y la vida. G. J. N° 49 de la III Serie Pág. 1627.

3ª.—Injurias graves o actitud hostil o despectiva que manifiesten claramente un estado habitual de falta de armonía de

las dos voluntades en la vida matrimonial. Estas causas serán apreciadas y calificadas por el Juez, teniendo en cuenta la educación, posesión social y demás circunstancias que puedan presentarse.

JURISPRUDENCIA.—Que, si bien, en el caso, son graves las injurias inferidas por la demandada contra su marido, sin embargo, atenta la ínfima posesión social de la ofensora y el medio ambiente propio de su clase, esas palabras injuriosas de uso diario y hasta de burla e ironías en las últimas capas sociales, no son suficientes para manifestar claramente el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida marital como lo requiere el N^o 3^o de uno de los artículos de la Reformatoria a la Ley de Matrimonio Civil, expedida el 4 de diciembre de 1935, no habiendo justificado, además el actor, ninguna otra injuria fuera de las irrogadas en una sola fecha determinada, lo cual excluye el estado habitual imputado por el actor en la demanda; y que es inverosímil el hecho de que, en convivencia humana no pueda ocurrir algún disgusto doméstico que ocasione el intercambio de palabras agresivas e injuriosas entre los cónyuges; pero cuya trascendencia momentánea no deja huellas rencorosas, sin que tales disgustos transitorios y talvez inevitables en la vida del hogar, especialmente entre personas de escasa o ninguna educación y sin prestancia social, pueda significar el hecho sustancial que exige la Ley para la destrucción de un matrimonio cuya existencia interese mucho a la sociedad civil. Por tanto, no siendo suficiente para la disolución del vínculo conyugal, el único hecho comprobado por el actor, debe desecharse la demanda y declararse sin lugar el divorcio. G. J. N^o 129 de la V Serie Pág. 3079.

Que si bien en la Reformatoria de la Ley de Matrimonio Civil, de 1935, se enumeran entre las causales de divorcio las injurias y actitudes hostiles, cuya gravedad y frecuencia manifiesten claramente la falta de armonía en vida marital, no habiéndose justificado sino un solo hecho de injuria, éste, sin la concurrencia habitual de otros análogos, no es suficiente para constituir una causa legal de divorcio; una amenaza, aunque concebida en términos que al parecer denoten la intención del cónyuge amenazante de quitar la vida a su consorte, no puede estimarse como tentativa de tal delito, porque en los disgustos que ocurren entre personas de escasa o ninguna educación social, son de uso frecuente expresiones de esa naturaleza; habiéndose producido las injurias graves y actitudes hostiles aducidas por el autor como uno de los fundamentos de su acción, antes de que se dicte la antedicha re-

formatoria de 1935 que las creó como causas de divorcio, resulta que, al tiempo en que se cometieron, no eran capaces de conferir al cónyuge perjudicado, derecho alguno para solicitar el divorcio; y para aceptar como causal para el divorcio el consentimiento tácito es necesario que se compruebe la separación de los cónyuges con ruptura absoluta de las relaciones conyugales por un tiempo no menor de tres años contiguos, no siendo posible aceptarla en caso contrario. En consecuencia, se declara sin lugar el divorcio demandado, por no haberse justificado plenamente los fundamentos de la acción. G. J. N^o 131 de la V Serie Pág. 3141.

4^a.—Amenazas graves y frecuentes de un cónyuge contra la vida del otro;

5^a.—Tentativa o crimen frustrado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o cómplice;

6^a.—El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, un hijo concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la legitimidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare la ilegitimidad, conforme a lo dispuesto en el Art. 199 del Código Civil;

7^a.—Los actos ejecutados por el marido o la mujer, con el fin de corromper a los hijos, lo cual será apreciado prudentemente por el Juez, según las circunstancias de cada caso;

8^a.—El hecho de adolecer uno de los cónyuges de sífilis, tuberculosis o lepra, en las condiciones y circunstancias en que estas enfermedades son generalmente consideradas como incurables o contagiosas o que habrían de transmitirse a la prole;

9^a.—El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o haga uso indebido y habitual de morfina, éter, opio o de cualquiera otra droga que produzca análogos o peores efectos que aquellas;

10^a.—La impotencia o la deformación orgánica de cualquiera de los cónyuges, que vuelva imposible la procreación;

11^a.—La condena ejecutoriada a tres años de prisión por lo menos, por crimen o delito; y,

12^a.—El hecho de que uno de los cónyuges arriesgue habitualmente, en juegos de azar, valores más o menos cuantiosos con relación a su fortuna.

El divorcio por estas causas será también declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas.

Art. 27.—En los juicios de divorcio, el menor de diez y ocho años deberá estar representado por su Curador general, o por un Curador especial.

JURISPRUDENCIA.—Para el divorcio debe concurrir la voluntad de los dos cónyuges, pero la voluntad legalmente expresada; y que si uno de los cónyuges es menor de edad, no puede prestar su consentimiento sino con intervención de Curador especial, a quien se le hubiere discernido legalmente el cargo G. J. N° 148 de la II Serie Pág. 1181.

Para que se declare el divorcio, debe concurrir la voluntad de los cónyuges, pero, se entiende, la voluntad legalmente manifestada, como que sólo ésta es fuente de derechos y obligaciones; y que, por lo tanto, el cónyuge menor de edad, para divorciarse por mutuo consentimiento, debe manifestarlo con intervención de un Curador especial; pues, la intervención de Curador *ad-litem* y su ratificación en orden al consentimiento declarado en la demanda, no son suficientes a validar; porque las facultades de este Curador, que no son otras que las relativas, a la representación del pupilo en las diligencias del juicio, no se extienden a la legal constitución del hecho en que la demanda se funda; y que, en consecuencia, es improcedente la demanda de divorcio, si el pupilo ha manifestado su consentimiento con sólo la intervención de Curador *ad-litem*. G. J. N° 81 de la III Serie Pág. 1882.

El cónyuge menor de edad no puede estar en juicio de divorcio, sino representado por un Curador general o especial nombrado para el efecto; y que, por haberse prescindido de tal Curador, el proceso es nulo. G. J. N° 50 de la IV Serie. Pág. 399.

Art. 28.—En todo divorcio la mujer que carece de lo necesario para su congrua sustentación y que no hubiere dado motivo al divorcio por su culpa, tiene derecho a que se le entregue la quinta parte de los bienes del marido (*)

NOTA.—Federico Páez, Encargado del Mando Supremo de la República.—CONSIDERANDO:—Que para impedir erróneas interpretaciones y asegurar las finalidades tenidas en mientes al dictarse la Ley, se hace necesario declarar el sentido del inciso 1° del séptimo de los artículos que contiene el Art. 2° del Decreto Supremo N° 112, de 4 de Diciembre de 1935 (Art. 28 de esta edición), Reformatorio de la Ley de Matrimonio Civil, en lo que concierne al divorcio: En ejercicio de las atribuciones de que se halla investido;—DECRETA:—Art 1° La condición expresada en el sobredicho inciso por medio de la frase “y que no hubiere dado motivo al divorcio por su culpa”, se interpreta en su sentido propio de que a

Si tuviere bienes, pero no de tanto valor, como esa quinta parte, sólo tendrá derecho al complemento.

Entre esos bienes se tomará en cuenta, para este efecto, el valor de sus gananciales en la sociedad conyugal con el marido.

Esta disposición se aplicará también a los casos en que el divorcio se declare por sentencia judicial posterior a la fecha de esta Ley, en las causas pendientes a esa fecha.

Art. 29.—Cuando el divorcio debe ser declarado por sentencia judicial, la mujer tendrá derecho a solicitar que en el mismo juicio se liquide la sociedad conyugal y se fije la cantidad que se le ha de entregar, en conformidad con el artículo anterior.

En las causas pendientes a la fecha de la presente Ley, cualquiera que sea la clase de divorcio sobre el que versen, la mujer podrá hacer igual solicitud, en primera instancia, antes de sentencia.

Art. 30.—En la liquidación de la sociedad conyugal que se verifique a consecuencia del divorcio, el marido no tendrá parte alguna en los bienes adquiridos por la mujer, como administradora de sus bienes propios que hubiere excluido anteriormente de la administración del marido.

Art. 31.—Inscritas el acta de divorcio por la sentencia que lo declare, cualquiera de los padres podrá demandar al otro, en beneficio de los hijos comunes menores de edad, el cumplimiento de las obligaciones que la Ley las impone con respecto a los alimentos congruos.

Podrán también proponer esta demanda el Ministerio Pú-

la mujer se le niega el derecho a la quinta parte de los bienes del marido, aunque carezca de lo necesario para su congrua sustentación, sólo en el caso de que el divorcio se declarase o se hubiese declarado por cualquiera de las causas, de que hubiera resultado responsable la mujer por su culpa, que están determinadas en el quinto artículo de los establecidos por el Art. 2º. de las Reformas mencionadas (Art. 26 de esta codificación): interpretación que regirá aun en los juicios pendientes en que se trate de aquel divorcio.—Art. 2º.—El Ministro de Gobierno, Justicia, etc., encárguese de la ejecución de esta Ley.—Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a veintitrés de abril de mil novecientos treinta y siete.—f) Federico Páez.—El Ministro de Gobierno, Justicia, etc., t) A. A. Bayas.—Registro Oficial Nº. 475 de 27 de abril de 1937.

blico, los ascendientes legítimos o padres ilegítimos, y los hermanos legítimos o ilegítimos de cualquiera de los cónyuges divorciados, y los hermanos legítimos o ilegítimos de los menores.

Esta demanda se propondrá ante el Juez Cantonal del domicilio del demandado y se tramitará en la forma prescrita en el Libro II, Título II, Sección 17 (16 de la edición vigente), del Código de Enjuiciamiento Civil. En el caso de este artículo, los padres de los menores tendrán capacidad para comparecer en el juicio, por sí solos, cualquiera que fuere su edad o estado civil.

El juez apreciará prudencialmente las circunstancias de cada caso, para determinar la cantidad y la forma en que el demandado ha de suministrar los alimentos, teniendo especial cuidado de que se provea a la enseñanza primaria de los menores y a la de alguna profesión u oficio.

Art. 32.—La demanda de divorcio se propondrá ante el Juez Cantonal del domicilio del demandado, y si éste se hallare en territorio extranjero, la demanda se propondrá en el lugar de su último domicilio en el Ecuador.

Para los efectos de este artículo se tendrá por domicilio de la mujer el lugar de su residencia actual, aun cuando el marido estuviere domiciliado en otro lugar.

JURISPRUDENCIA.—Que, a constar, legalmente, el haberse contraído matrimonio en país extranjero, en conformidad a las Leyes del mismo país, el matrimonio surte sus efectos civiles en el Ecuador, si consta, por otra parte, la capacidad de los contrayentes; y que si los cónyuges de un matrimonio así celebrado, constituyen domicilio en el Ecuador, son competentes para conocer de las causas de divorcio que entre aquellos se susciten. G. J. N° 209, de la III Serie, Pág. 2906.

El domicilio de la mujer, en estos juicios (los de divorcio), es no el del marido, según los principios generales, sino aquel en donde la mujer ha tenido su residencia, acompañada real y presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. según el Art. 55 del Código Civil; y que, la disposición del Art. 28 de la Ley de Matrimonio Civil (32 de esta codificación), para que pueda tener aplicación práctica, debe considerarse como una excepción de la regla general en orden al domicilio de la mujer no divorciada. G. J. N° 218 de la IV Serie, Pág. 1745.

Contradicho en el juicio de divorcio, el domicilio de los cónyuges, las declaraciones de testigos, para justificar ese domicilio, deben recibirse dentro del término que el Juez conceda al efecto, previa aceptación del Agente Fiscal y Defensor de Matrimonios y del respectivo interrogatorio; que a

lo dicho no obsta la circunstancia de que esos funcionarios no hayan señalado lugar alguno para las citaciones, si el actuario, al notificarles con la demanda, no cumplió con la obligación de advertirles el deber que tienen de hacer tal señalamiento; y que al pronunciarse sentencia, haciendo mérito de esa prueba indebidamente actuada el proceso es nulo por falta de la solemnidad sustancial de competencia de jurisdicción G. J. N^o. 51 de la V Serie, Pág. 1174.

Que constando de la partida respectiva, que los esposos al tiempo de la celebración del matrimonio estaban domiciliados en el Cantón donde se ha propuesto la demanda y no existiendo circunstancia alguna que haga presumir un cambio de domicilio en el tiempo transcurrido entre tal celebración y la demanda de divorcio, y no habiendo sido puesto en duda por el Agente Fiscal ni por los Defensores Públicos que intervinieron en primera instancia, el hecho de que continuaban los divorciantes domiciliados en ese Cantón, es indudable que, en el caso, quedó debidamente establecida la competencia del Alcalde Cantonal que ha fallado la causa; que esa competencia no ha podido desvirtuarse por la mera observación hecha en segunda instancia por el Ministerio Fiscal y Defensores Públicos, sobre que no constaba que ninguno de los cónyuges hallábase domiciliados en ese Cantón; pues para ello, habría sido menester que se contradiga categóricamente aquel domicilio de los divorciantes, afirmándose que lo tenían en otro lugar, introduciendo un verdadero incidente al respecto, que ocasione la prueba del caso sobre el domicilio de los consortes, para según élla, deducir sobre la incompetencia del Juez, ya que no cabe deducir—la incompetencia—de meras suposiciones o dudas, sino de hechos positivos que la establezcan. G. J. N^o. 70, de la V Serie, Pág. 1666.

Que, constando de autos, que los cónyuges han propuesto el divorcio en un Cantón distinto del en que contrajeron el matrimonio y estaban domiciliados al celebrarlo, sin que estos ni sus apoderados hubiesen manifestado al proponer el divorcio que alguno de aquellos por lo menos, tenía su domicilio en el Cantón donde lo intentaron, para que fuese competente el Alcalde de ese Cantón para conocer y fallar tal juicio; y que habiendo observado, oportunamente el Agente Fiscal esta circunstancia, la de la incertidumbre del domicilio, sin ser atendida, acarrea la nulidad del proceso, por incompetencia de jurisdicción. G. J. N^o. 73 y 74 de la V Serie. Pág. 1721.

Que si uno de los cónyuges afirma que tiene su domicilio en el Cantón en donde se ha iniciado el juicio y ningun-

na de las partes contradice tal afirmación, y, consta la declaración de testigos relativa a que uno de los cónyuges tiene su domicilio en ese mismo Cantón, por no referirse esos testimonios tan sólo a la fecha en que fué presentada —ya que se funda en un hecho, la residencia habitual, que necesariamente supone una serie de actos reiterados en un lapso anterior—, no hay incertidumbre acerca del domicilio de uno de los cónyuges en lugar del juicio, ni consta que ambos estuviesen domiciliados en otro Cantón, único caso en que debe declararse que el juez de primera instancia carece de jurisdicción. G. J. N° 81 de la V Serie, Pág. 1844.

Art. 33.—Toda demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitará en juicio verbal sumario.

Art. 34.—En los juicios de divorcio, la sentencia ejecutoriada no está sujeta a la nulidad establecida en el artículo 343 del Código de Enjuiciamiento Civil (318 de la edición vigente). (*).

Art. 35.—Las causas sobre validez o nulidad del matrimonio tendrán siempre tres instancias e intervendrán en ellas, como parte, el Ministerio Público.

En las de divorcio, los recursos se regirán por lo dispuesto en la Ley para el trámite verbal sumario.

JURISPRUDENCIA.—Sólo los Alcaldes Cantonales y Tribunales civiles son competentes para conocer de las causas sobre nulidad de matrimonio cualquiera que sea la fecha, y las sentencias pronunciadas por ellos son las únicas obligatorias, legalmente. G. J. N° 98 de la II Serie, Pág. 784.

El matrimonio definido en el Art. 99 del Código Civil, se halla sujeto a las Leyes Civiles, pudiendo por tanto el Legislador modificarlas conforme a sus facultades; dada la Ley de Matrimonio Civil y expedidas las Reformas, el Juez tiene que aplicarlas, como toda otra Ley de la República, cualquiera que sea la fecha de la celebración del matrimonio. G. J. N° 6 de la III Serie, Pág. 1280.

La intervención del Agente Fiscal, en tanto es válida, en cuanto interviene en los asuntos civiles, criminales y de hacien-

NOTA.—La sentencia ejecutoriada es nula:

1°.—Por falta de jurisdicción o por incompetencia del Juez que la dictó;

2°.—Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio; y,

3°.—Por no haberse citado la demanda al demandado, si el juicio se ha seguido y terminado en rebeldía.

da que se actúen en la circunscripción territorial en que tiene su residencia el expresado empleado; por lo mismo, es ilegal la intervención del Agente Fiscal en las causas de divorcio que cursan en un Cantón distinto del de su residencia, ya que en este caso se debe nombrar un Promotor Fiscal; y al no procederse según lo expresado anteriormente el proceso es nulo. G. J. N° 113, de la IV Serie, Pág. 908.

Así el Ministerio Fiscal, como el Defensor de Matrimonios son parte en las causas matrimoniales, y, en esta virtud, están obligados a cumplir con lo prescrito en los Arts. 107 y 108 del Código de Enjuiciamiento Civil (Art. 80 y 81 de la edición vigente); prescripciones que comprenden a todo el que figura como parte en el juicio, sin excepción alguna; pues que lo contrario establecería, para determinadas personas, una manera peculiar de citación que no se conformaría con las prescripciones generales a este respecto. G. J. N° 115, de la IV Serie, Pág. 923.

A la demanda de nulidad de matrimonio corresponde la sustanciación del juicio ordinario, ya que la Ley no ha establecido trámite especial para ello; en este juicio, la citación de la demanda debe practicarse con observancia de las formalidades que la Ley prescribe; contándose entre estas formalidades, según el Art. 465 del Código de Enjuiciamiento Civil (1125 de la edición vigente), la de copia de la demanda que, con el decreto de traslado con apercibimiento en rebeldía, se entrega a la parte demandada, lo que debe anotarse en diligencia misma de la citación; por lo mismo, a omitirse la entrega de la copia, se falta a la primera solemnidad sustancial prescrita por el Art. 423 del indicado Código (N° 4° del 372 de la edición vigente), nulidad que aún debe ser declarada de oficio como comprendida en el Art. 407 (375 de la edición vigente); si las partes citadas con la demanda no la contestan, el actor debe acusarles la rebeldía para que pueda continuar el juicio; que representando el Agente Fiscal y el Defensor de Matrimonios, el interés público, no puede dicha intervención ser eficaz y eficiente con sólo la formalidad de la citación, pues, que es menester que den su dictamen; siendo en consecuencia nulo el proceso, si se omiten las formalidades arriba indicadas. G. J. N° 198 de la IV Serie, Pág. 1587.

El llamamiento que se hace, por falta de Agente Fiscal, al Procurador Síndico Municipal, para que intervenga en las diligencias del juicio de divorcio, contraviene a la disposición del Art. 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (148 de la edición vigente), en la que se ordena que, por falta o impedimento del Agente Fiscal, el Juez debe nombrar, en la

causa que sea necesaria la intervención de aquel, un Promotor Fiscal; contravención que por referirse a la segunda de las solemnidades sustanciales previstas en el Art. 407 del Código de Enjuiciamiento Civil (Nº 3º del 372 de la edición vigente), vicia de nulidad el proceso. G. J. Nº 257 de la IV Serie, Pág. 1270.

Las tres instancias forzosas, de que trata el Art. 29 de la Ley de Matrimonio Civil (35 de la edición vigente), se hallan establecidas con respecto a la causa matrimonial misma, no con relación a los varios incidentes o providencias que el trámite de ellas son necesarios o pueden sobrevenir; y rigiendo en esta clase de juicios las reglas generales sobre recursos, se deben elevar en consulta sólo las sentencias o las resoluciones que pongan fin a la causa, tal como sucede por lo general, y análogamente, tratándose de otros juicios que también interesan a la causa pública, como las criminales o los que perjudican a la hacienda nacional o a ciertas Instituciones del Estado. G. J. Nº 37 de la V Serie, Pág. 896.

A falta de mayor edad de uno de los cónyuges, a tiempo de suscribir y presentar la demanda de divorcio, así como la falta de intervención de un Curador en aquellos actos y la del Defensor de Matrimonios en el juicio, queda subsanada en tercera instancia, mediante la presentación del escrito en el que cónyuge, una vez mayor de edad, expresa que insiste en la demanda G. J. Nº 58, de la V Serie, Pág. 1294.

Entablada una demanda civil, el Juez tiene que resolverla, sin que pueda suspenderse o denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de Ley como lo preceptúa el Art. 18 del Código Civil, a no ser que el actor o recurrente se separe de un modo expreso o tácito de continuar el juicio o sostener el recurso, conforme a las disposiciones contenidas en la Sección II del Título I del Libro II del Código de Enjuiciamiento Civil (Sección XI de la edición vigente); y aún en el caso de alegarse la existencia de otro pleito igualmente civil, tampoco es dado al Juez suspender la sustanciación del que se ha propuesto ante él, pues debe atenderse a las reglas que, acerca de la acumulación de autos contiene el Art. 137 del ya citado Código (109 de la edición vigente), pudiendo el demandado, por otra parte proponer la excepción de litis pendencia; y no existiendo disposición alguna legal que obligue al Juez a suspender el procedimiento civil, hasta que se ventile un juicio criminal; y si el demandante intenta la acción civil en juicio ordinario, de falsedad

de matrimonio del demandado, es el caso confirmar la providencia que deniega la excepción dilatoria, relativa a que debe preceder el fallo del Juez en lo criminal, que declare la falsedad del matrimonio a que se refiere la demanda. G. J. N^o 127 de la V serie, Pág. 3026.

Véase la Nota al Art. 25.

Art. 36.—La acción de nulidad de matrimonio y la de divorcio son irrenunciables.

Lo es también el derecho de la mujer a que en caso de divorcio, se le entregue la parte de los bienes del marido a que se refiere la presente Ley.

Art. 37.—La acción de divorcio por consentimiento tácito se extingue por la reconciliación de los cónyuges; sin perjuicio de la que pueda deducirse por causa de una nueva separación, que reúna las circunstancias determinadas en esta Ley.

Art. 38.—La acción de divorcio prescribe en el plazo de un año, contado:

Por las causales puntualizadas en los Nos. 1^o, 5^o y 7^o del Art. 26, desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa de que se trate;

Por la del N^o 2^o, desde que se realizó el hecho;

Por las de los Nos. 3^o, 4^o, 8^o, 9^o y 12, desde que cesó el hecho constitutivo de la causa; y

Por las de los Nos. 6^o y 11, desde que se ejecutorió la sentencia respectiva.

Art. 39.—El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto demente o sordo-mudo, que no puede darse a entender por escrito, no podrá disolverse por divorcio.

Art. 40.—Toda acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los cónyuges, aun en el caso de que la demanda se hallare ya propuesta y cualquiera que fuere el estado del juicio.

Las causas pendientes a la fecha de esta Ley, quedan sujetas a la presente disposición.

JURISPRUDENCIA.—El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, Art. 119, inciso 1^o del Código Civil; disuelto por esta causa, no es posible que vuelva a ser disuelto por ninguna otra, cualquiera que ésta sea, y siendo personal la acción de divorcio, el derecho de ejercerla o continuarla es intrasmisible a los herederos, cesa la acción y termina la jurisdicción del Juez; por lo mismo se extingue el poder conferido por el cónyuge que ha muerto para el juicio de divorcio, sin que, por las razones expuestas, pueda aplicarse la disposición del inciso 2^o del Art. 2156 del Código Civil;

y por consiguiente los efectos civiles del divorcio por adulterio no son ni pueden ser materia de este juicio, para que se ordene su continuación, sólo para efecto de tomarlos en cuenta. G. J. N° 269 de la IV Serie, Pág. 1401.

Art. 41.—Los juicios de divorcio por mutuo consentimiento pendientes a la fecha en que esta Ley comience a regir, seguirán sustanciándose, se resolverán y surtirán sus efectos, con arreglo a las Leyes anteriores a la presente; sin perjuicio de que los cónyuges, si lo tuvieran a bien, prescindan de sus juicios y procedan a divorciarse en la forma recién establecida.

Los juicios pendientes por las demás causas legales de divorcio, seguirán también sustanciándose y se fallarán de conformidad con las Leyes anteriores a la presente.

Art. 42.—Se derogan los Arts. 163 y 164 del Código Civil; y el Art. 165, en vez de "*Decreto*", dirán "*Sentencia*", y en vez de "*Reconoce*", dirá "*Declara*".

Art 43.—Los matrimonios extranjeros, que fijen su domicilio en el Ecuador, están sometidos a las obligaciones que establece la presente Ley y gozarán de los derechos que élla concede.

JURISPRUDENCIA.—Al estar escrito en idioma extraño el documento que sirve de base al divorcio consensual, conforme al Art. 83 del Código de Enjuiciamiento Civil, debe ser traducido por dos intérpretes nombrados y juramentados por el Juez, a menos que las partes acuerden que fuese uno solo; por lo mismo, no tiene autenticidad alguna la traducción hecha por el encargado de un Consulado del Ecuador en el extranjero, ya que tal funcionario no tiene atribución para ello, siendo requisito indispensable para que el matrimonio extranjero surta efectos civiles en el Ecuador, se halle inscrito en el Registro de que trata el inciso 1° del Art. 30 de la Ley de Registro Civil; y en consecuencia no constando legalmente comprobada la existencia del matrimonio cuya disolución se trata de obtener, el Juez se halla en el caso de denegar la demanda de divorcio. G. J. N° 27 de la V Serie, Pág. 581.

La inscripción de un estado civil, en el Registro correspondiente da la posesión legal del mismo y faculta para ejercer los derechos concernientes a tal estado, y en tratándose de un matrimonio celebrado en nación extranjera, la inscripción debe hacerse en la Oficina Central de la Capital de la República; sin estos requisitos, ni se adquiere la posesión legal del estado civil de casados ni la facultad para ejercer los derechos concernientes a él, entre los cuales se cuenta el de

Modelo No 1.

*Formulario para el Acta Inicial a que se refiere
el Art. 11 de la Ley.*

En.... (1).....a (2).... de (3).... de mil novecientos....
(4).....a la.... (5) de la (6) ante el suscrito Je-
fe (o Teniente) Político del Cantón (o parroquia) de(7)....
comparecieron por una parte N. N. de nacionalidad (8) ..
nacido en (9) de años de edad, domiciliado en
(10) de estado ... (11) (A) de profesión (u ofi-
cio) (12) hijo de N. N. de estado(13) de na-
cionalidad (14) ..domiciliado en (15).... de profesión
(u oficio) (16) y de doña N. N. (17) ... (B)....
y por otra doña N. N. de estado (18) (C) de
nacionalidad (19).... nacida en(20) de años
de edad, domiciliada en (21) de profesión (u ofi-
cio) (22) hija de don N. N. de estado (23)....
de nacionalidad (24) domiciliado en ... (25) de
profesión (u oficio) (26) y de doña N. N. de esta-
do (27) de nacionalidad (28) domiciliada en
(29) de profesión (u oficio).... (30); y manifestaron
que era su voluntad contraer matrimonio recibíendose, mutua-
mente, por marido y mujer, que no había impedimento algu-
no para la celebración de su matrimonio, como lo ofrecían

-
- 1) Aquí el nombre y lugar donde se practica la diligencia.
 - 2) El día del mes: primero, diez, veinte, etc., en letras
 - 3) El nombre del mes: Enero, Marzo, etc.
 - 4) El año que corresponde: 3, 5, 6, etc., en letras.
 - 5) La hora: diez, doce, una, dos, etc.
 - 6) Mañana, tarde o noche.
 - 7) El nombre del cantón o parroquia.
 - 8) Ecuatoriana, colombiana, francesa, etc.
 - 9) El lugar donde haya nacido.

probar con la respectiva información sumaria..... (D)El infrascrito Jefe (o Teniente) Político dispuso que se recibiera la información sumaria de los testigos presentados por los comparecientes para justificar que no tenían prohibición alguna legal para contraer matrimonio; y, juramentados en legal forma los testigos señores N. N. y N. N. expusieron, cada uno, separadamente, que les consta que los señores....(31).... no tienen impedimento alguno, según la ley, para contraer matrimonio.

Concluyó la presente acta, ordenándose la publicación de los edictos indicados en el artículo 12 de la ley (32)...., y firmando, con el suscrito, los comparecientes y los testigos arriba expresados don N. N. de nacionalidad (33)....

-
- 10) El lugar del domicilio: nombre del pueblo en que vive o reside permanentemente.
 - 11) Soltero o viudo.
 - 12) La profesión o el oficio que tenga; y, caso de no tenerlo, su empleo u ocupación actual.
 - 13) Soltero, casado o viudo.
 - 14) Chileno, peruano, portugués, etc.
 - 15) Como en el número 10.
 - 16) Como en el número 12.
 - 17) Se hará lo indicado en los números 13, 14, 15 y 16.
 - 18) Soltera o viuda.
 - 19) Ecuatoriana, rusa, etc.
 - 20) El lugar donde haya nacido.
 - 21) Como en el número 10.
 - 22) Como en el número 12.
 - 23) Como en el número 13.
 - 24) Como en el número 14.
 - 25) Como en el número 15.
 - 26) Como en el número 12.
 - 27) Como en el número 13.
 - 28) Como en el número 14.
 - 29) Como en el número 15.
 - 30) Como en el número 12.
 - 31) Los nombres de los contrayentes.
 - 32) En caso de que el Jefe Político haya dispensado dicho requisito, se suprimirá esta parte, haciendo constar en el acta las razones en que se fundó para hacer uso de la facultad que le concede el inciso 2º del artículo 12 de la Ley.
 - 33) Como en el número 8.

deaños de edad, domiciliado en..... (34).....de profesión (u oficio).....(35).....y don N. N. de nacionalidad.....(36).....deaños de edad, domiciliado en.... 37)....de profesión (u oficio)... (38) años de edad, domiciliada en.....(37)..... de profesión (u oficio) (38) ...

[*Aquí la firma del Jefe o Teniente Político*].

(*Aquí las firmas de los contrayentes, o sus apoderados, en su caso*)

(*Aquí las de los testigos*)

(*Aquí la del Secretario*)

A continuación de la precedente acta, después de todas las firmas, y pasados ocho días, el Secretario sentará una razón en los siguientes términos:

Certifico: que, desde el....(39)....hasta el.....(40) ... han permanecido fijos en las puertas del Despacho de esta Jefatura (o Tenencia) Política, los edictos correspondientes, haciendo saber que don N. N. va a contraer matrimonio con doña N. N.....(41) (*Aquí la fecha.*)

(*Aquí la firma del Secretario*).

34) Como en el número 10.

35) Como en el número 12.

36) 37 y 38) Como en los tres números anteriores.

39) El día en que se sentó el acta inicial.

40) El día en que ha expirado el término que señala el artículo 12 de la Ley.

41) Cuando el Jefe Político dispense la publicación de los edictos, en lugar de dicho certificado, se pondrá la siguiente razón:

Diligencia: No se han fijado los edictos, a causa de haber dispensado de este requisito a los contrayentes, el señor Jefe Político, por las razones que constan en el acta precedente. (*Aquí la fecha*)

(*Aquí la firma del Secretario*).

(A) Si el compareciente fuere viudo, se pondrá en este lugar la siguiente frase:

"De estado viudo de fulana de tal, de tal nacionalidad.

(B) Cuando el contrayente se presente, por medio de apoderado, se intercalará en este lugar lo que sigue:

"Por medio de su apoderado don N. N. de nacionalidad (la que tenga), de....años de edad; domiciliado en

.....: de estado quien presenta el respectivo poder, otorgado ante el Escribano señor en (el lugar donde ha sido otorgado) el (la fecha) en que el poderdante le faculta para contraer matrimonio en representación suya, con doña N. N. etc”.

(C) Si la compareciente fuere viuda, se procederá del mismo modo que en la nota (A).

(D) En caso de que alguno de los contrayentes tenga descendientes legítimos de un matrimonio anterior, disuelto, se pondrá en este lugar lo siguiente:

“El (o la) compareciente declaró (o declararon) que de su anterior (o anteriores) matrimonio (o matrimonios) tiene o tienen [aquí el nombre y edad de cada uno de los hijos legítimos”].

Cuando alguno de los contrayentes tuviere la administración de bienes de menores que estén bajo su patria potestad, o guarda, se expresará en este mismo lugar, lo que sigue:

“N. N. declara que los bienes pertenecientes a su hijo [o pupilo] N. N. han sido inventariados en la forma legal”. Y, en caso de que ninguno de los comparecientes tuviere hijos, o pupilos, bajo su cuidado, presentarán la información sumaria mencionada en la parte final del Art. 122 del Código Civil; expresándose, en el mismo lugar del acta lo siguiente:

“El contrayente (o ambos) declaró (o declararon) que no tiene (o no tienen) descendientes ni pupilos bajo su cuidado; y, la respectiva información sumaria que lo acredita, se agregó a este expedientillo”.

Cuando alguno de los contrayentes fuere menor de edad, y necesite el consentimiento requerido por la ley para contraer matrimonio, se hará constar dicho consentimiento en este mismo lugar del acta, en los siguientes términos:

“El señor N. N. (padre, madre, abuelo, abuela, curador, etc.) que estuvo presente, y suscribió también esta acta, manifestó su consentimiento para la celebración del matrimonio”.

En caso de que dicho consentimiento se presente por escrito se dirá: “El (o la) compareciente N. N. menor de (aquí los años) edad, presentó por escrito el consentimiento de su (aquí el nombre del padre, madre, guardador, etc.) y se agregó a esta acta el respectivo comprobante”.

Modelo No 2.

Formulario para edictos

El infrascrito Jefe (o Teniente) Político, a petición de los interesados y de acuerdo con lo que previene el artículo 12 de la Ley de Matrimonio Civil, hace saber: que quieren contraer matrimonio don N. N. de estado (1) de nacionalidad (2) (nacido en (3) de años de edad, domiciliado en (4) de profesión (u oficio) (5) y doña N. N. de estado (6) de nacionalidad (7) nacida en (8) de años de edad, domiciliada en (9) de profesión (u oficio) (10) Previénese, por tanto, que quienes sepan que las personas arriba nombradas tienen algún impedimento legal para contraer el matrimonio proyectado, están en la obligación de denunciarlo, de palabra (11) o por escrito, ante esta autoridad, dentro de ocho días contados desde la fecha, bien entendido que expirado este plazo, se procederá a la celebración de dicho matrimonio de conformidad con la ley. Fíjese este edicto en la puerta de la oficina por espacio de ocho días.
(Aquí la fecha).

(Aquí la firma del Jefe o Teniente Político).

Por su mandato.

(Aquí la firma del Secretario).

-
- (1) Soltero o viudo.
 - (2) La que sea.
 - (3) El lugar donde haya nacido.
 - (4) El lugar donde vive o reside permanentemente.
 - (5) El que tenga; y, caso de no tenerlo, su empleo u ocupación actual.
 - (6) Soltera o viuda.
-

-
- (7) La que sea.
 - (8) El lugar de nacimiento.
 - (9) El lugar donde vive o reside permanentemente.
 - (10) El que tenga; y, caso de no tenerlo, su empleo u ocupación actual.
 - (11) Cuando se haga la denuncia verbal, se la reducirá a escrito, sentando la correspondiente acta, que suscribirán el Jefe o el Teniente Político, el denunciante y el Secretario.
-

Modelo N^o 3.

Formulario para sentar el acta de la celebración del matrimonio

En (1) a (2) de (3) ...
..... de mil novecientos (4) a la (5) ...
..... de la (6) en la oficina del infrascrito Jefe
(o Teniente) Político de (7) [A] compa-
recieron, por una parte don N. N. [B] de na-
cionalidad (8) nacido en (9) de ...
..... años de edad, domiciliado en (10) de es-
tado (11) de profesión (u oficio) (12) ...
..... hijo de don N. N. de estado (13) de na-
cionalidad (14) domiciliado (15) de
profesión [u oficio) (16) y de doña N. N.

- 1) Aquí el nombre del lugar donde se practica la diligencia.
- 2) El día del mes, en letras.
- 3) El nombre del mes.
- 4) El año que corresponda, en letras.
- 5) La hora, en letras.
- 6) Mañana, tarde o noche.
- 7) El nombre del cantón, o parroquia.
- 8) Ecuatoriana, colombiana, etc.
- 9) El lugar donde haya nacido.
- 10) El nombre del lugar donde vive, o reside, permanentemente.
- 11) Soltero o viudo.
- 12) La que sea, y, en caso de no tenerla, su empleo u ocupación actual.
- 13) Soltero, casado o viudo.
- 14) Chileno, peruano, etc.
- 15) El nombre del lugar donde vive, o reside permanentemente.
- 16) Como en el número 12.

(17); y por otra doña N. N. de estado
(18) de nacionalidad (19) nacida en
(20) de años de edad, domiciliada en (21)
..... de profesión [u oficio] (22) hija de don
N. N. de estado (23) de nacionalidad (24)
..... domiciliado en (25) de profesión [u oficio]
(26) y de doña N. N. (27) y declararon
solemnemente en presencia de los testigos que más abajo se
expresarán, y del Secretario que suscribe, que era su volun-
tad de unirse en matrimonio, y pidieron que se procediera a
la respectiva ceremonia en la forma establecida por la Ley.

- 17) Se hará lo mismo que en los números 13, 14, 15 y 16.
- 18) Soltera o viuda.
- 19) Ecuatoriana, francesa, etc.
- 20) El nombre del lugar donde haya nacido.
- 21) El nombre del lugar donde vive, o reside, perma-
nentemente.
- 22) La que tenga, como en el número 12.
- 23) Como en el número 13.
- 24) Como en el número 14.
- 25) Como en el número 15.
- 26) Como en el número 16.
- 27) Como en el número 17.
- 28) El acta inicial que consta en el modelo número 1,
y el certificado que debe ponerse al pie, según di-
cho modelo.
- 29) Los nombres de los contrayentes.
- 30) La que sea.
- 31) Como en el número 10.
- 32) Como en el número 12.
- 33) Lo mismo que en los números 30, 31 y 32.

- (A) Cuando el matrimonio se celebre en casa de uno de
los contrayentes, o en el salón municipal, se expre-
sará tal circunstancia en este lugar.
- (B) Si se trata de un matrimonio en que concurre apo-
derado, por parte del novio, se hará mención de
tal circunstancia en este lugar; y en el lugar corres-
pondiente, si se trata de la novia.

(C).—No constando que se hubiera presentado denuncia alguna, legalmente comprobada, de que existe impedimento para la celebración del matrimonio proyectado y habiendo expirado el plazo prevenido en el artículo 12 de la Ley, durante el cual han permanecido fijos en las puertas de las oficinas los respectivos edictos, el infrascrito Jefe (o Teniente) Político después de leídas el acta y diligencias precedentes (28) preguntó a los mencionados don N. N. y doña N. N. (29) de si querían recibirse, mútua y voluntariamente, el uno al otro por marido y por mujer; y habiendo contestado ambos que SI, de modo tal que todos los presentes lo entendieron, los declaró legalmente casados, en nombre de la República y por autoridad de la ley, empleando la fórmula que ésta prescribe en su artículo 18 inciso 2º (D). En fe de lo cual se dispuso extender la presente acta, que

(C) En caso de que el matrimonio se verifique entre un mayor y una menor de edad, o viceversa, o entre dos menores de edad, estando presente la persona (o personas) que debe (o deben) prestar su consentimiento, se pondrá en este lugar lo siguiente:

“Presente (o presentes) el señor (aquí el nombre de la persona, o personas, que da, o dan, el consentimiento) manifestó (o manifestaron) que prestaba (o prestaban) su consentimiento para la celebración del matrimonio de su (hijo, hija, nieto, nieta, pupilo, etc.) don N. N. (o doña N. N.) con don N. N. (o doña N. N.) firmando esta acta en prueba de ello”.

Cuando el consentimiento de los que deben darlo, se otorgue por escritura pública, se pondrá lo siguiente, en este mismo lugar del acta;

“El menor (la menor o los menores) presentó (o presentaron) una copia, que se agrega a esta acta, de la escritura pública otorgada por (aquí el nombre de la persona que otorgó la escritura) ante el Escribano de (aquí el nombre del lugar donde reside el Escribano), señor N. N., el día, (aquí la fecha), en que consta que dicho señor o señora (aquí únicamente el apellido de la persona o personas que da, (o dan el consentimiento) consiente (o consienten) en el matrimonio de su hijo (o hija) don N. N. con doña N. N. de”.

(D) En caso de que la ceremonia religiosa se efectúe inmediatamente después de la civil, y en el mismo

después de leída, también fue suscrita por los contrayentes, (E) los testigos señores N. N. de nacionalidad (30) de años de edad, domiciliados en (31) de profesión (u oficio) (32) y don N. N. (33) y por los infrascritos Jefe (o Teniente) Político, y Secretario que certifica.

(Aquí la firma del Jefe o Teniente Político)

(Aquí las firmas de los contrayentes o sus apoderados)

(Aquí las de las personas que dan su consentimiento, en su caso)

(Aquí las de los testigos)

(Aquí la del Secretario).

local, se pondrá en este lugar lo siguiente:

“En seguida, el señor N. N. (aquí el nombre del párroco o ministro de religión que lo haga) dió la bendición nupcial a los contrayentes, conforme al rito de la Iglesia: (aquí el nombre de la Iglesia: católica, anglicana, metodista, luterana, etc.”

(E) Cuando concurra apoderado (o apoderados) se pondrá en este lugar del acta lo siguiente:

“El señor (o los señores) N. N. apoderado (o apoderados) de don (o de doña) N. N.”

Y si estuvieren presentes las personas que deben dar el consentimiento, se pondrá, también, en este lugar, lo que sigue:

“El señor (o la señora) N. N. (padre, madre, abuelo, abuela, tutor, curador, etc.) de don (o doña) N. N.”

obtener el divorcio en los casos puntualizados por la Ley de la materia; por lo tanto, a faltar esa inscripción no es admisible el divorcio solicitado. G. J. N° 37 de la V. Serie, Pág. 1280.

Según la Reforma de 29 de octubre de 1904 a la Ley de Matrimonio Civil, los matrimonios extranjeros que fijen su domicilio en el Ecuador, están sometidos a las obligaciones que establece dicha Ley y gozan de los derechos que concede la misma; y como en el caso, no consta de autos prueba que justifique que el matrimonio de que se trata hubiese adquirido domicilio en el Ecuador, por alguno de los modos establecidos en el Art. 3° de la Ley de extranjería de 18 de octubre de 1921, débese confirmar con costas el fallo recurrido, que declara sin lugar el divorcio. G. J. N° 154, de la V Serie, Pág. 3782.

Art. 44.—Las actuaciones correspondientes al matrimonio civil no causan derechos y se tramitarán en papel común; pero sí causarán derechos las actuaciones correspondientes a los juicios de nulidad y divorcio. Para estas actuaciones se usará el sello de tercera clase. (*)

JURISPRUDENCIA.—Al cobrarse derechos por la celebración del matrimonio Civil, se hace culpable el funcionario que así procede, de la infracción puntualizada en el Art. 228 del Código Penal (240 de la edición vigente) G. J. N° 115 de la II Serie, Pág. 920.

Art. 45.—El Poder Ejecutivo suministrará los libros del caso y los correspondientes formularios a las Autoridades de las parroquias rurales. (*)

NOTA.—Juicios y actuaciones judiciales.—Los juicios y actuaciones Judiciales civiles y criminales, inclusive carteles, y los documentos que sin estar sujetos a timbre, se presentare en los juicios, en cada foja:

En los juicios civiles de cuantía indeterminada: \$ 0,80, letra "C" del numeral 34 del Art. 31 de la Ley de Timbres, sancionada en 13 de febrero de 1936.

NOTA.—La Ley de Matrimonio Civil, se puso en vigencia en la República, el 1° de enero de 1903, y las disposiciones contenidas desde el Art. 22 al 42 de la presente codificación, el 6 de diciembre de 1935.
